



¿Hasta el 2021?

VIDA NACIONAL

AFP

Llegamos al 2021, un año al cual la jerga política chavista le dio especial connotación como fecha “hito”, pues en numerosas oportunidades Hugo Chávez advirtió que permanecería en el poder hasta cumplirse el bicentenario de la Batalla de Carabobo: “Tengo que pedirles permiso por adelantado para irme el 24 de junio del 2021”, dijo Chávez en algún discurso; frase que repitió en no pocas ocasiones. Lo cierto es que Chávez no llegó al 2021, pero su proyecto político sí, y nada indica que el mismo esté por terminar pronto.

Luego de las elecciones parlamentarias de diciembre 2020, la Asamblea Nacional inició sesión el 5 de enero de 2021. De los 277 diputados que la integran, 256 son militantes del chavismo. Si bien la mayoría de la oposición decidió no atender ni participar en esas elecciones, lo cierto es que el Parlamento está bajo el control total del gobierno de Miraflores, y desde allí ha comenzado su estrategia y su acción política.

LOS ENCUENTROS PARA EL DIÁLOGO

La Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional se desplegará por todo el territorio nacional para escuchar al sector universitario, para consolidar una plataforma que sirva de encuentro para los venezola-

nos, y reproducir iniciativas de este diálogo que ha dado tan buenos resultados.

Con estas palabras el presidente de la nueva Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, instaló la reunión de una comisión encargada para el diálogo con todos los sectores del país. En esta oportunidad, sostuvo un encuentro con los rectores de diferentes universidades. Según la información, participaron veintidos rectores de forma presencial y 79 de manera remota. Sin embargo, las casas de estudio presentes tienen la particularidad de ser afines al Gobierno, dejando de lado a las universidades autónomas y privadas.

¿Es este el *diálogo universitario* que necesita el país? ¿No hace falta incluir y escuchar a todas las universidades, aún las que no son afines a Miraflores, para poder tener un verdadero diálogo?

La Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación también sostuvo reuniones con el sector empresarial y con el sector religioso, específicamente las iglesias evangélicas.

En el encuentro con Fedecámaras, se plantearon propuestas de flexibilizar y adaptar los procesos administrativos y trámites, así como revisar los instrumentos legales para el beneficio de la economía venezolana; igualmente, que el sector privado colabore con Miraflores en la implementación de medidas para



ALONSO CALATRAVA RUMBOS

combatir la COVID-19. Pero, sin duda alguna, el principal objeto de la reunión fue el reconocimiento de las partes: Miraflores reconoce a Fedecámaras como la máxima instancia del empresariado nacional. Fedecámaras reconoce a la Asamblea Nacional como instancia política parlamentaria.

Por su parte, el encuentro entre la Comisión de Diálogo y Paz con un sector de la Iglesia evangélica, se centró en una agenda clara y específica de inclusión. Se creó la subcomisión especial de pastores evangélicos para seguimiento y concreción de acciones en favor del diálogo, la paz y la reconciliación nacional. Vale la pena destacar que en la Asamblea Nacional, veintiún diputados son evangélicos, de los cuales diecisiete pertenecen al partido Esperanza por el Cambio liderado por el pastor Javier Bertucci, y los cuatro restantes son miembros del PSUV. Pero la preocupación vuelve a ser la misma ¿Por qué no convocar a todas las Iglesias evangélicas? ¿Por qué no convocar a otras confesiones o al mismo Foro Interreligioso Social Venezolano? ¿Es este el diálogo necesario, entre afines? ¿No hace falta escuchar a todos?

Por supuesto que desde SIC celebramos toda iniciativa de encuentro, de diálogo, de paz, de reconciliación, pero estas iniciativas deben ser genuinas y bien intencionadas; no puede haber partes "ausentes" en los procesos de reconciliación, no pueden existir agendas ocultas, no pueden dejar de abordarse los problemas reales de la gente. Porque de ser así no se logrará ni el diálogo, ni la reconciliación.

Ahora toca ver si las cosas ofrecidas pueden llegar a ejecutarse, ya que la experiencia indica que toda propues-

ta de diálogo o intercambio del Gobierno con los diferentes sectores de la nación termina en punto muerto.

LIBERACIONES ESPERADAS Y NECESARIAS

Luego de un año detenidos en la cárcel de El Rodeo II fueron liberados los doce pemones que están acusados de asaltar el Fuerte de Luepa, en Santa Elena de Uairén. Desde hacía tiempo varias organizaciones pedían su libertad, más cuando, el pasado 3 de enero, falleciera Salvador Franco, luego que se le negara la atención médica, a pesar de que tenía orden de traslado para que recibiera los cuidados necesarios en un centro de salud.

Los pemones liberados fueron trasladados a Santa Elena de Uairén y entregados al cacique mayor, Jorge Gómez. Les tocará presentarse de forma continua a los tribunales, lo que significa que todavía tienen la causa judicial abierta.

También se conoció de la liberación de los cinco miembros de la organización Azul Positivo, quienes estuvieron un mes detenidos, luego que su oficina fue allanada por la DGCIM y, posteriormente, fueron acusados de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Durante su reclusión presentaron síntomas de COVID-19, lo que obligó su traslado a un centro asistencial para ser atendidos pero, les fue negada la liberación plena por parte del tribunal, a pesar de los esfuerzos de la defensa.

Azul Positivo ha informado que seguirá trabajando desde el estado Zulia, contribuyendo a aliviar el sufrimiento de cientos de familias vulne-

rables. Es precisamente este uno de los esfuerzos que la ONG ha estado desarrollando desde hace más de diecisiete años.

LA RELATORA ESPECIAL DE LA ONU

Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas, visitó Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021 para realizar un informe y sus conclusiones sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. El nombre de la misión es, de entrada, bastante sesgado; sin embargo, resalta con la seriedad y la responsabilidad que sobre Douhan recae como profesional, un hecho inculcable en sus conclusiones preliminares: "[...] las sanciones han exacerbado las calamidades preexistentes".

Es decir, la crisis es previa a las sanciones, pero estas medidas han empeorado tremendamente la situación.

Douhan resaltó la importancia de poner el foco en la gente. Recordó que las preocupaciones humanitarias siempre deben tenerse en cuenta con la debida observancia al respeto mutuo, la solidaridad, la cooperación y el multilateralismo.

La relatora especial destacó la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, del 2 de febrero de 2021, para aliviar las sanciones que afectan el funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

Si bien Douhan reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre la población, la relatora deja claro que el principal responsable de dar solución a la gravísima situación es el Gobierno de Venezuela. Para ello exhorta a que Miraflores trabaje junto a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para implementar plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, fortalecer la presencia de la Oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos en el terreno, y organizar visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

Que así sea.